

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA RESPUESTA A DIVERSAS PETICIONES CIUDADANAS RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DEL VOTO A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL VOTO ELECTRÓNICO POR INTERNET, EN ACATAMIENTO A LAS SENTENCIAS SUP-JDC-113/2024 Y SUP-JDC-201/2024 ACUMULADOS; SUP-JDC-204/2024, SUP-JDC-207/2024 Y SUP-JDC-213/2024 ACUMULADOS; SUP-JDC-214/2024; SUP-JDC-206/2024 Y SUP-JDC-112/2024, DICTADAS POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

G L O S A R I O

Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Credencial para Votar	Es el documento oficial expedido por el Registro Federal de Electores a la ciudadanía en pleno uso de sus derechos político-electorales, para que puedan emitir su voto. Contiene los datos de identificación de la persona electora.
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
INE/Instituto	Instituto Nacional Electoral.
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lineamientos	Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2023-2024.
LNE	Lista(s) Nominal(es) de Electores.
LNEVA	Lista(s) Nominal(es) del Electorado con Voto Anticipado para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2023-2024.
LOVA	Lineamientos para la Organización del Voto Anticipado en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

<b>Modelo de Operación</b>	Modelo de Operación para la Prueba Piloto de Voto Anticipado.
<b>Padrón Electoral</b>	Es la relación en la que consta la información básica de las mujeres mexicanas y los varones mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 de la LGIPE, agrupados en dos secciones, la de personas ciudadanas residentes en territorio nacional y la de personas ciudadanas residentes en el extranjero.
<b>PEF</b>	Proceso(s) Electoral(es) Federal(es).
<b>PEL</b>	Proceso(s) Electoral(es) Local(es).
<b>RE</b>	Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
<b>SIILNEVA</b>	Solicitud(es) Individual(es) de Inscripción a la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado.
<b>SIVEI</b>	Sistema del Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral.
<b>TEPJF</b>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
<b>VMRE</b>	Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.

## A N T E C E D E N T E S

1. **Implementación del Voto Anticipado en procesos electorales anteriores al PEF 2023-2024 y los PEL Concurrentes.**
  - I. **Lineamientos para la conformación de la LNE de la prueba piloto del Voto Anticipado para el PEL 2021-2022 en el Estado de Aguascalientes.** El 25 de febrero de 2022, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG146/2022, los Lineamientos para la conformación de la LNE de la prueba piloto del Voto Anticipado para el PEL21-22 en el Estado de Aguascalientes.
  - II. **Informe final de la prueba piloto del Voto Anticipado para el PEL21-22 en el Estado de Aguascalientes.** El 24 de agosto de 2022, se presentó en la Comisión Temporal de Seguimiento a los PEL 2021-2023, el Informe final de la prueba piloto del Voto Anticipado para el PEL 21-22

en el Estado de Aguascalientes, en el que se señalaron los objetivos logrados, las conclusiones y las líneas de acción a las que se llegó, con base en la experiencia recabada.

- III. **Lineamientos para la conformación de la LNE de la prueba piloto del Voto Anticipado para el PEL 2022-2023 en los estados de Coahuila de Zaragoza y de México.** El 27 de febrero de 2023, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG124/2023, los Lineamientos para la conformación de la LNE de la prueba piloto del Voto Anticipado para el PEL22-23 en los estados de Coahuila de Zaragoza y de México.
  - IV. **Informe final de la prueba piloto del Voto Anticipado para el PEL22-23 en los estados de Coahuila de Zaragoza y de México.** El 17 de julio de 2023, se presentó en la Comisión Temporal de Seguimiento a los PEL21-22, el Informe final de la prueba piloto del Voto Anticipado para el PEL22-23 en los estados de Coahuila de Zaragoza y de México, en el que se señalaron los objetivos logrados, las conclusiones y las líneas de acción a las que se llegó, con base en la experiencia recabada.
2. **Procedimiento para la atención por artículo 141 de la LGIPE.** El 10 de junio de 2019, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó a la DERFE, mediante Acuerdo INE/CNV12/JUN/2019, aplicar el “Procedimiento para la atención por Artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Mayo 2019”.
  3. **Procedimiento para la atención a la ciudadanía que está imposibilitada físicamente para acudir al Módulo de Atención Ciudadana y/o que no puede manifestar, por sus propios medios su voluntad de manera clara, precisa e indubitable, para realizar su trámite de inscripción o actualización al Padrón Electoral y entrega de la Credencial para Votar.** El 22 de enero de 2020, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG28/2020, el “Procedimiento para la atención a la ciudadanía que está imposibilitada físicamente para acudir al Módulo de Atención Ciudadana y/o que no puede manifestar, por sus propios medios su voluntad de manera clara, precisa e indubitable, para realizar su trámite de inscripción o actualización al Padrón Electoral y entrega de la Credencial para Votar”, en acatamiento a las sentencias SG-JDC-279/2019 y SM-JDC-247/2019, dictadas por las Salas Regionales de Guadalajara y Monterrey del TEPJF.

4. **Lineamientos del voto electrónico por internet para las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero.** El 9 de mayo de 2022, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG346/2022, las modificaciones al RE en materia de voto electrónico por internet para las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, así como la aprobación y publicación de su Anexo 21.2, relativo a los “Lineamientos del voto electrónico por internet para las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero”.
5. **Aprobación de los LOVA.** El 20 de julio de 2023, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG436/2023, los LOVA.
6. **Aprobación de los planes integrales y calendarios del PEF 2023-2024 y los PEL Concurrentes.** El 20 de julio de 2023, este Consejo General aprobó, mediante acuerdos INE/CG441/2023 e INE/CG446/2023, el “Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024”, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, y el “Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los PEL Concurrentes con el PEF 2023-2024”, respectivamente.
7. **Aprobación del Modelo de Operación.** El 8 de septiembre de 2023, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG528/2023, el Modelo de Operación y los documentos electorales del PEF 2023-2024 y los PEL Concurrentes.
8. **Aprobación y modificación de los Lineamientos.** El 28 de septiembre de 2023, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG542/2023, los Lineamientos y sus anexos.

El 15 de febrero de 2024, mediante Acuerdo INE/CG111/2024, este Consejo General aprobó la modificación de los Lineamientos.

**9. Solicitudes ciudadanas y sus respectivas respuestas.**

- I. El 10 de enero de 2024, la C. Margarita “N”, en representación de su hijo mayor de edad con discapacidad Carlos Antonio “N”, dirigió escrito de petición ante la Consejera Presidenta del INE, con el objetivo de que se realizara un ajuste de accesibilidad que permitiera a los antes mencionados y a todas las personas con discapacidad, registrarse y votar a través del SIVEI, a fin de garantizar sus derechos político-electorales.

El 31 de enero de 2024, el Secretario Técnico Normativo de la DERFE emitió la respuesta a la citada petición mediante el oficio INE/DERFE/STN/3767/2024, en la que determinó como improcedente la solicitud.

- II.** El 16 de enero de 2024, la C. Lorena “N”, en su calidad de cuidadora primaria de su hijo menor de edad con discapacidad, dirigió escrito de petición ante la Consejera Presidenta del INE con el objetivo de que se realizara un ajuste de accesibilidad que permitiera a ella y a todas las personas en una situación similar, registrarse y votar a través del SIVEI, a fin de garantizar sus derechos político-electorales.

El 6 de febrero de 2024, el Secretario Técnico Normativo, mediante oficio INE/DERFE/STN/4020/2024, informó que el INE, en ejercicio de su facultad reglamentaria, no puede emitir lineamientos o reglas que excedan el alcance de los mandatos o modificar sus contenidos, por ser la ley, la medida y justificación de su actuación, tal y como el mismo TEPJF lo determinó al resolver el expediente SUP-JDC-10247/2020.

- III.** Los días 16, 22 y 23 de enero de 2024, las ciudadanas Celia Maribel “N”, Laura Patricia “N” y María de la Luz “N”, ostentándose como cuidadoras primarias de sus respectivos hijos menores de edad con discapacidad, presentaron sendos escritos dirigidos a la Consejera Presidenta del INE, mediante el cual solicitaron se les permitiera votar a través del SIVEI, a fin de garantizar sus derechos político-electorales.

Posteriormente, el 6 de febrero de 2024, el Secretario Técnico Normativo de la DERFE emitió los oficios INE/DERFE/STN/3988/2024, INE/DERFE/STN/3925/2024 e INE/DERFE/STN/3975/2024, por los que negó las solicitudes planteadas, al considerar que el SIVEI solo es aplicable a la ciudadanía que reside en el extranjero.

- IV.** El 22 de enero de 2024, la C. Eva “N”, por su propio derecho y en representación de su hijo mayor de edad con discapacidad José Alberto “N”, dirigió escrito de petición a la Consejera Presidenta del INE, solicitando se realizara un ajuste de accesibilidad para que se les permitiera, así como a todas las personas con discapacidad, registrarse y votar a través del SIVEI, a fin de garantizar sus derechos político-electorales.

El 7 de febrero de 2024, el Secretario Técnico Normativo de la DERFE emitió el oficio INE/DERFE/STN/4035/2024, en el que se determinó la inviabilidad de la petición.

- V. El 16 de enero de 2024, la C. Cecilia Maribel “N”, por su propio derecho y en representación de su hijo mayor de edad Eric “N”, con discapacidad, solicitaron al INE un ajuste de accesibilidad con el fin de que se les permita a las personas con discapacidad y a sus cuidadores primarios que residen en la Ciudad de México, registrarse y votar a través del SIVEI en la jornada electoral del 2 de junio de 2024.

El 23 de enero de 2024, la Dirección Jurídica del INE respondió, mediante oficio INE/DJ/1340/2024, que la petición era inviable, ya que en el año 2020 este Consejo General negó una consulta similar. Sin embargo, remitió el escrito a la DERFE para que verificara la viabilidad de incluirles en la modalidad de votación anticipada.

- 10. Presentación de medios de impugnación.** Entre los días 26 de enero y 13 de febrero de 2024, las personas ciudadanas referidas en el numeral anterior presentaron sus respectivos medios de impugnación ante el TEPJF, con la finalidad de impugnar los oficios emitidos por el Secretario Técnico Normativo de la DERFE, en los que determinó la inviabilidad para que puedan ejercer su voto a través del SIVEI.
- 11. Modificación de los Lineamientos.** El 15 de febrero de 2024, mediante Acuerdo INE/CG111/2024, este Consejo General aprobó la modificación al numeral 19, párrafo 1, inciso b) de los Lineamientos, así como la extensión del plazo para los trámites de actualización al Padrón Electoral mediante el procedimiento para la atención por el artículo 141 de la LGIPE, del 31 de diciembre de 2023 al 16 de febrero de 2024.
- 12. Resoluciones de la Sala Superior del TEPJF.** El 21 de febrero de 2024, la Sala Superior del TEPJF emitió las resoluciones recaídas en los expedientes SUP-JDC-113/2024 y SUP-JDC-201/2024 acumulados; SUP-JDC-204/2024, SUP-JDC-207/2024 y SUP-JDC-213/2024 acumulados; SUP-JDC-214/2024; SUP-JDC-206/2024 y SUP-JDC-112/2024, a través de las cuales revocó los oficios impugnados emitidos por el Secretario Técnico Normativo de la DERFE y la Dirección Jurídica de este Instituto, por carecer de competencia.

Asimismo, la citada Sala Superior vinculó a este Consejo General para que, en plenitud de atribuciones, emita una respuesta completa y exhaustiva a las solicitudes de las partes actoras.

## **C O N S I D E R A N D O S**

### **PRIMERO. Competencia.**

Este Consejo General es competente para dar respuesta a las peticiones ciudadanas relacionadas con el ejercicio al voto a través del SIVEI, en acatamiento a las sentencias SUP-JDC-113/2024 y SUP-JDC-201/2024 acumulados; SUP-JDC-204/2024, SUP-JDC-207/2024 y SUP-JDC-213/2024 acumulados; SUP-JDC-214/2024; SUP-JDC-206/2024 y SUP-JDC-112/2024, dictadas por la Sala Superior del TEPJF, y conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafo segundo, de la CPEUM; 44, numeral 1, inciso jj) de la LGIPE; 5, numeral 1, inciso x) del Reglamento Interior del INE.

### **SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.**

#### **I. Marco constitucional**

Acorde a lo establecido en el artículo 1º, párrafo primero de la CPEUM, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece.

Así, en términos del párrafo segundo de la disposición aludida, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El párrafo tercero del artículo referido dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En ese contexto, el artículo 34 de la CPEUM, establece que son ciudadanas y ciudadanos de la República, las mujeres y los varones que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.

Asimismo, el artículo 35, párrafo primero, fracciones I y II de la CPEUM, mandata que son derechos de la ciudadanía, entre otros, votar en las elecciones populares y poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

Adicionalmente, el artículo 36, párrafo primero, fracción I de la CPEUM, así como el artículo 130, párrafo 1 de la LGIPE, indica que es obligación de las ciudadanas y los ciudadanos de la República, inscribirse en el Registro Federal de Electores, en los términos que determina la LGIPE.

Bajo esa arista, el artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafo primero de la CPEUM, así como los diversos 29, 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la LGIPE, señalan que el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y las ciudadanas y los ciudadanos, en los términos que ordene la LGIPE. Todas las actividades de este Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género.

A su vez, la citada disposición constitucional determina en su Base V, Apartado B, inciso a), numeral 3, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción III de la LGIPE que, para los PEF y los PEL, corresponde al INE, el Padrón Electoral y la LNE.

En consonancia con lo anterior, el artículo 133 de la LGIPE, menciona que el INE se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la LNE.

## **II. Marco convencional internacional de derechos humanos**

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, apartado 3, indica que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del



poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Por su parte, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, en su artículo 2, párrafo 1, dispone que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce, en los incisos e) y h) del Preámbulo, que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás; también, que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano.

En ese sentido, el artículo 1º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, prevé que el propósito de dicho instrumento es promover proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. En tal sentido, se puntualiza que, entre las personas con discapacidad, se incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

El artículo 2, párrafo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala que se entiende como discriminación por motivos de discapacidad, cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de

todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.

Los ajustes razonables, de conformidad con el párrafo quinto de dicho precepto, son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

En términos del artículo 5, numerales 1, 2 y 3 de la misma Convención, los Estados parte reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna; por tanto, prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo, para tal efecto, adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. De ahí que se desprenda que los Estados Parte deben adoptar medidas positivas para facilitar que las personas con discapacidad disfruten en igualdad de condiciones de los derechos garantizados en legislación.

El artículo 12, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, indica que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, lo cual será en igualdad de condiciones que los demás en todos los aspectos de la vida. Para tal efecto, los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica; así, en dichas medidas se proporcionarán salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.

Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial competente,

independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. De lo anterior se advierte que lo que se debe buscar es asegurar que se respeten los derechos, la voluntad y preferencias de quien posee la diversidad funcional.

Además, el artículo I, numeral 1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, prevé que la discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

Acorde a lo previsto por el artículo 2, párrafos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados parte se comprometen a respetar y a garantizar a todas y todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dicho Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; así también, a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto referido, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

El propio Pacto invocado en su artículo 25, incisos a) y b), establece la obligación de los Estados Parte para proteger que todas y todos los ciudadanos gocen, sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas, del derecho y oportunidad a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos y, consecuentemente, del derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de las y los electores.

Luego entonces, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en sus artículos 23, numeral 1, incisos a) y b), respectivamente, protegen que todas las ciudadanas y ciudadanos puedan tomar parte en el gobierno de su país y gocen de los derechos y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, así como de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libertad del voto.

Dichas obligaciones y deberes convencionales del Estado Mexicano son reconocidas y regladas en cuanto a su protección y formas de ejercicio en la CPEUM y desarrollados en un marco normativo que comprende la legislación electoral nacional.

### **III. Marco legal nacional**

El artículo 1, párrafo 2 de la LGIPE, instituye que las disposiciones de dicha ley son aplicables a las elecciones en los ámbitos federal y local respecto de las materias que establece la CPEUM.

Además, el artículo 5, párrafo 1 de la LGIPE, prevé que su aplicación corresponde, en sus respectivos ámbitos de competencia, al INE, al TEPJF, a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados y al Senado del Congreso de la Unión.

De conformidad con el artículo 7, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, en relación con el diverso 35, fracción I de la CPEUM, votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de la ciudadanía, que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a las personas electoras.

Por otra parte, el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d), e) y f) de la LGIPE, refiere que son fines del INE contribuir al desarrollo de la vida democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, así como ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los PEL, y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

Los artículos 34, párrafo 1, inciso a) y 35 de la LGIPE; así como, 4 párrafo 1, numeral I, apartado A, inciso a) del Reglamento Interior del INE, establecen que este Consejo General es un órgano central del Instituto y superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones

constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto. En su desempeño aplicará la perspectiva de género.

A su vez, el artículo 43, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, dispone en lo conducente que, este Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie; asimismo, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva establecerá los acuerdos para asegurar su oportuna publicación en ese medio oficial.

No debe perderse de vista que, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c), d) y ñ) de la LGIPE, la DERFE tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar, y actualizar anualmente el Padrón Electoral, así como expedir la Credencial para Votar, conforme al procedimiento establecido en el Libro Cuarto de la propia LGIPE y las demás que le confiera ésta.

Conforme el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, el INE prestará por conducto de la DERFE y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, mismo que es de carácter permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 de la CPEUM sobre el Padrón Electoral.

El artículo 127, párrafo 1 de la LGIPE, advierte que el Registro Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón Electoral.

El artículo 128 de la LGIPE, estipula que en el Padrón Electoral constará la información básica de las mujeres mexicanas y los varones mexicanos, mayores de 18 años, que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 de la propia LGIPE, agrupados en dos secciones, la de personas ciudadanas residentes en México y la de residentes en el extranjero.

El artículo 130 de la LGIPE, ordena que las ciudadanas y los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores y a informar a éste de su cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a que ello ocurra; asimismo, las ciudadanas y los ciudadanos participarán en la formación y actualización del Padrón Electoral en los términos de las normas reglamentarias correspondientes.

De conformidad con el artículo 133, párrafo 1 de la LGIPE, el INE se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la LNE.

Ahora bien, el artículo 141 de la LGIPE, dispone que la ciudadanía mexicana residente en el territorio nacional, que se encuentre incapacitada físicamente para acudir a inscribirse ante las oficinas de la DERFE correspondiente a su domicilio, deberá solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad. En su caso, la DERFE dictará las medidas pertinentes para la entrega de la Credencial para Votar de la persona electora físicamente impedida.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 329, párrafo 2 de la LGIPE, el ejercicio del VMRE podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con la propia LGIPE y en los términos que determine el INE.

El artículo 329, párrafo 3 de la LGIPE, indica que el VMRE por vía electrónica sólo podrá realizarse conforme a los lineamientos que emita el INE en términos de la propia ley, mismos que deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares.

De conformidad con el artículo 341 de la LGIPE, el Instituto deberá asegurar que el voto por vía electrónica cuente con, al menos, los elementos de seguridad que garanticen: que quien emite el voto, sea la o el ciudadano mexicano residente en el extranjero, que tiene derecho a hacerlo; que la o el ciudadano mexicano residente en el extranjero no pueda emitir más de un voto, por la vía electrónica u otra de las previstas en la LGIPE; que el sufragio sea libre y secreto; y la efectiva emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto emitido.

Con base en el artículo 2, fracción II de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se entenderá por ajustes razonables, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

El artículo 2, fracción IX de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, define a la discapacidad como la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

La fracción X del mismo artículo, establece que la discapacidad física es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

A su vez, el artículo 2, fracción XIV de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, define a la discriminación por motivos de discapacidad, como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.

También, los artículos 4, párrafo primero y 32, párrafo primero de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establecen, en lo conducente, que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, entre ellos la libertad de expresión y opinión; sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

El artículo 1, fracción I de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, indica que se entenderá por ajustes razonables las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso

particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás.

En la fracción III del artículo referido en el párrafo que antecede, se advierte lo que se entiende por discriminación, esto es, toda distinción, exclusión restricción o preferencia que, por acción u omisión, con la intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado de obstaculizar, restringir, impedir menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica de salud o jurídica la religión la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

Ahora bien, a fin de salvaguardar de manera más amplia los derechos político-electorales de la ciudadanía para solicitar su inscripción al Padrón Electoral, actualizar su situación registral y obtener su Credencial para Votar con la que podrán ejercer su derecho al sufragio, el artículo 82 del RE, dispone que este Consejo General podrá aprobar, con el conocimiento de la Comisión Nacional de Vigilancia, un ajuste a los plazos para la actualización del Padrón Electoral y generación de la Lista Nominal de Electores para el proceso electoral que corresponda.

Para tal efecto, los incisos a) al h) del artículo 82 del RE, establecen los rubros a los que se podrán realizar ajustes para cualquier proceso electoral o de participación ciudadana; entre otros, los relativos a las campañas de inscripción o actualización, a la conformación de listados nominales que se entregarán para revisión a los partidos políticos, así como a la impresión de las Listas Nominales de Electores Definitivas.

Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis 1a. CXV/2015, misma que se cita a continuación:

**PERSONAS CON DISCAPACIDAD. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MEJOR INTERPRETACIÓN POSIBLE DE SU VOLUNTAD Y SUS PREFERENCIAS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 12 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD).** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos



citados deriva que su objetivo principal es garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. En ese sentido, cuando pese a realizarse un esfuerzo considerable fuere imposible determinar la voluntad y las preferencias de la persona, la determinación del denominado "interés superior" debe sustituirse por la "mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias", ya que bajo este paradigma se respetan su autonomía y libertad personal y, en general, todos sus derechos en igualdad de condiciones que los demás. Así, cuando la persona con discapacidad hubiese manifestado de algún modo su voluntad, acorde con el paradigma de la mejor interpretación posible, habría que establecer y respetar los mecanismos necesarios para que esa manifestación no sufra detrimento o sea sustituida.

De igual manera, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis 35/2019, que establece lo siguiente:

**PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO.** El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.

#### **IV. Disposiciones normativas del Voto Anticipado.**

Con el objetivo de organizar y ejecutar la modalidad de Voto Anticipado en territorio nacional en el PEF2023-2024 y los PEL Concurrentes, el numeral 23 de los LOVA, dispone que la conformación de la LNEVA se sujetará a lo previsto, además de dicho ordenamiento, en el Modelo de Operación y en los Lineamientos.

El numeral 24 de los LOVA, indica que los Lineamientos deberán diseñarse con perspectiva de ampliación del derecho humano al voto, por lo que deberán considerar que podrán emitir Voto Anticipado todas las personas que entre 2018 y 2023 hayan realizado o realicen el trámite de credencialización conforme a lo que determina el artículo 141 de la LGIPE y que manifiesten su intención de inscribirse en la LNEVA mediante la SIILNEVA.

Además, el numeral 25 de los LOVA señala que el ejercicio del Voto Anticipado corresponderá con el último registro que, al 31 de diciembre de 2023, se tenga en la LNE, cuya fecha fue ampliada al 22 de enero de 2024, acorde con la modificación a los Lineamientos. Por consecuencia, las actividades de actualización al Padrón Electoral y credencialización quedarán excluidas en este ejercicio de Voto Anticipado.

En términos del numeral 26 de los LOVA, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la DERFE enviarán a la Junta Local Ejecutiva los archivos electrónicos de las invitaciones y las SIILNEVA, respectivamente; para que, a su vez, la Junta Local los remita a la Junta Distrital Ejecutiva de la demarcación correspondiente a los domicilios de las personas solicitantes.

De conformidad con el numeral 27 de los LOVA, las Juntas Distritales Ejecutivas coordinarán las visitas a los domicilios de las personas solicitantes, a fin de entregarles una invitación para participar en el ejercicio de Voto Anticipado y, en su caso, recabar la SIILNEVA.

Con base en el numeral 28 de los LOVA, los Consejos Distritales, a propuesta de la respectiva Junta Distrital Ejecutiva, aprobarán a las personas designadas para entregar invitaciones y recopilar la SIILNEVA y el Voto Anticipado. Los Consejos Distritales podrán aprobar como personas designadas a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, personal de la Rama Administrativa, personas Prestadoras de Servicios, personal de Módulos de Atención Ciudadana, personas Supervisoras Electorales y personas Capacitadoras Asistentes Electorales.

El numeral 30 de los LOVA, refiere que las personas solicitantes que deseen emitir el Voto Anticipado deberán llenar la SIILNEVA conforme a lo que establezcan los Lineamientos y el Modelo de Operación.

También, el numeral 31 de los LOVA establece que, una vez recabadas las SIILNEVA correspondientes al distrito electoral federal, la Junta Distrital

Ejecutiva las remitirá a la DERFE conforme a lo que señale el Modelo de Operación.

A su vez, el numeral 32 de los LOVA, determina que las representaciones de los partidos políticos y de las candidaturas independientes acreditadas ante el Consejo Distrital respectivo podrán, por sus propios medios, participar en los recorridos de visita a los domicilios de las personas solicitantes, pero con la finalidad de resguardar la privacidad de las personas no podrán ingresar a los mismos.

Conforme a lo establecido en el numeral 19, párrafo 1 de los Lineamientos, los requisitos mínimos que deberá cumplir la ciudadanía para participar en la modalidad de Voto Anticipado para el PEF2023-2024 y los PEL Concurrentes, serán los siguientes:

- a) Estar inscrita(o) en el Padrón Electoral y LNE;
- b) Haber realizado un trámite de actualización al Padrón Electoral, entre el 1° de enero de 2018 y el 22 de enero de 2024, conforme a lo dispuesto en el artículo 141 de la LGIPE; y, haber obtenido la CPV, a más tardar el 16 de febrero de 2024, fecha en la que se realizará la revisión de los resultados de la verificación de situación registral;
- c) Manifestar que se encuentra impedido(a) temporal o permanente para acudir a una casilla el día de la jornada electoral a ejercer su derecho al voto, y
- d) Manifestar su intención de registrarse en la LNEVA llenando completamente y, en su caso, firmando y/o estampando su huella digital del dedo índice derecho. En el supuesto de que la persona no pueda firmar la SIILNEVA, solo se estampará la huella o huellas dactilares.

El numeral 34, primer párrafo de los Lineamientos establece que las determinaciones sobre la procedencia o improcedencia de la SIILNEVA deberán garantizar, cuando menos, lo siguiente:

- a) El cumplimiento de los plazos;
- b) Un análisis integral del expediente;

- c) La fundamentación y motivación de las consideraciones para determinar la procedencia o improcedencia de la SIILNEVA, y
- d) La salvaguarda en todo momento de los derechos político-electorales del electorado con Voto Anticipado.

Por su parte, el segundo párrafo del mismo numeral de los Lineamientos, señala que la DERFE informará a la Comisión del Registro Federal de Electores y a la Comisión Nacional de Vigilancia el resultado de las determinaciones sobre la procedencia o improcedencia de las SIILNEVA.

#### **V. Disposiciones normativas del voto electrónico por internet para las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero.**

Conforme a lo establecido por el artículo 101, párrafos 1 y 4 del RE, corresponde al INE la implementación del VMRE, a través de sus áreas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La implementación y ejecución del VMRE bajo la modalidad electrónica por internet será responsabilidad del INE cuando se trate de, entre otras, la elección de Presidencia de la República, de Senadurías, de Gubernatura y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como otros cargos de elección popular, siempre y cuando la Constitución de la entidad federativa correspondiente prevea el VMRE.

El párrafo 6 del artículo en mención señala que, en cada proceso electoral o mecanismo de participación ciudadana previsto en leyes federales en que se considere la participación de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, se implementará la modalidad de votación electrónica por internet.

Asimismo, el artículo 102, párrafo 1 del RE, señala que, para el VMRE, este Consejo General emitirá los lineamientos a fin de establecer los mecanismos para la inscripción en la LNE-Extranjero, el envío de documentos y materiales electorales, la modalidad de emisión del voto, así como el escrutinio y cómputo del VMRE para las elecciones federales y, en su caso, para las elecciones locales en las entidades federativas cuyas legislaciones también lo prevean, así como para los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales, que resulten aplicables, de conformidad con el Libro Sexto de la LGIPE.

El párrafo 2 del artículo en comento establece que, en el caso de que se implemente la modalidad de voto de VMRE por vía electrónica, se deberá observar lo establecido en el Anexo 21.2 del RE.

El párrafo 6 del mismo artículo señala que, para los PEF y PEL, así como para los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales; el INE pondrá a disposición de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, el sistema que permita la correcta emisión y transmisión de su voto en las elecciones en las que tenga derecho a votar, siempre y cuando haya elegido esta modalidad para la emisión de su voto.

El Artículo Transitorio Séptimo del RE, prevé que la modalidad de voto electrónico para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero será aplicable en los procesos electorales, siempre que se cumpla con lo establecido en el Libro Sexto de la LGIPE.

En términos del numeral 2 del Anexo 21.2 del RE, esos Lineamientos son de orden público y de observancia general y obligatoria para el INE, los Organismo Públicos Locales, las representaciones de los partidos políticos con registro nacional y local y, en su caso, de las candidaturas independientes, en sus respectivos ámbitos de competencia, las personas físicas o morales que participen en las etapas de planeación y ejecución de la auditoría, así como para las personas ciudadanas mexicanas que decidan ejercer su derecho al sufragio desde el extranjero, bajo la modalidad electrónica por Internet.

En ese sentido, el numeral 3 del Anexo 21.2 del RE determina que esos Lineamientos tienen por objeto:

- a) Establecer las bases jurídico-reglamentarias, administrativas y operativas para, potenciar y socializar, el ejercicio de los derechos político-electorales y de participación ciudadana de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero mediante la implementación del modelo de votación electrónica por internet;
- b) Cumplir con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, los cuales en conjunto se realizan con perspectiva de género, en el ejercicio de la función electoral relativa al voto electrónico de las y los mexicanos residentes en el extranjero en el ámbito federal y local;

- c) Establecer las generalidades, características, así como las reglas de operación que debe cumplir el SIVEI, y
- d) Definir los aspectos metodológicos para la realización de la auditoría al SIVEI, así como, los requerimientos de selección del ente auditor que la lleve a cabo.

Con base en los preceptos normativos anteriormente enunciados, se considera que válidamente este Consejo General se encuentra facultado para dar respuesta a las peticiones ciudadanas relacionadas con el ejercicio al voto a través del SIVEI, en acatamiento a las sentencias SUP-JDC-113/2024 y SUP-JDC-201/2024 acumulados; SUP-JDC-204/2024, SUP-JDC-207/2024 y SUP-JDC-213/2024 acumulados; SUP-JDC-214/2024; SUP-JDC-206/2024 y SUP-JDC-112/2024, dictadas por la Sala Superior del TEPJF.

### **TERCERO. Respuesta a las peticiones ciudadanas.**

El INE está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en el ámbito de su competencia, como autoridad en materia electoral.

En ese sentido, es importante mencionar que el principio de progresividad implica una obligación a quienes aplican las normas, de ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad de acuerdo con las circunstancias reales y jurídicas.

De esta manera, el INE como autoridad electoral está obligada a prever mecanismos que promuevan y salvaguarden el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada estableciendo, incluso si es necesario, acciones afirmativas para generar la condiciones que permitan la emisión del sufragio en todo el territorio nacional.

En ese tenor, de las peticiones ciudadanas relacionadas con el ejercicio del voto a través del SIVEI, se desprende que las mismas consisten, medularmente, en los siguientes aspectos:

1. A manera de ajuste razonable, se permita a las peticionarias registrarse y votar a través del sistema de voto electrónico por internet (SIVEI), a fin

de garantizar sus derechos político-electorales en las próximas elecciones del 2 de junio de 2024.

2. Se fije la fecha de registro, a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales en las próximas elecciones del 2 de junio de 2024.
3. Se permita a las mexicanas y mexicanos con discapacidad y a sus cuidadoras primarias, que residen en la Ciudad de México, registrarse y votar a través del sistema de voto electrónico por internet (SIVEI), a fin de garantizar sus derechos políticos-electorales.

Ahora bien, de los escritos en comento se advierte que las peticionarias señalan ser cuidadoras primarias de personas con discapacidad (menores y mayores de edad), por lo cual dicha situación les representa un impedimento para acudir el día de la jornada electoral a emitir su sufragio a la casilla que les corresponde, razón por la cual solicitan se les permita votar por la vía electrónica a través del SIVEI.

En este sentido, respecto a su solicitud de registrarse y votar a través del SIVEI, con base en lo estipulado en el artículo 329, párrafos 2 y 3 de la LGIPE, **el ejercicio del voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero podrá realizarse por correo o, en su caso, por vía electrónica**, de conformidad con la ley y en los términos que determine el Instituto, mismos que deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a las y los mexicanos residentes en el extranjero para el efectivo ejercicio del derecho de sufragar en las elecciones populares.

Resulta importante tomar en consideración lo establecido por la Sala Superior del TEPJF en la resolución del juicio ciudadano SUP-JDC-10247/2020, en la que determinó que existe una reserva de ley para regular la modalidad de voto electrónico a través de internet. Ello, puesto que en los artículos 35, fracción I y 36, fracción III de la CPEUM, se especifica que el derecho a votar en los términos que señale la ley y, a todas luces resulta indispensable que, para la ejecución del voto electrónico en territorio nacional, se lleven a cabo las modificaciones necesarias a la normatividad que rigen los procesos electorales.

Bajo tales consideraciones, **actualmente existe una imposibilidad jurídica y material** temporal para que este Instituto pueda atender de manera favorable tales peticiones, **al no existir disposición legal que regule el voto**

**electrónico a través de internet para las mexicanas y los mexicanos residentes en territorio nacional.**

Siendo así, la posibilidad de ampliar el supuesto normativo respecto de quienes pueden acceder a esta modalidad de votación está supeditada a lo que señale la LGIPE que, en el caso, lo constriñe a mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.

Bajo esa tesitura, la ciudadanía que se encuentra inscrita en la LNE en territorio nacional, acorde con lo establecido en el artículo 278, párrafo 1 de la LGIPE, deberá acudir a sufragar de manera presencial a la casilla que le corresponda en territorio nacional, a excepción de los que actualizan la hipótesis del artículo 141 de la multicitada ley, para quienes se ha establecido la modalidad de Voto Anticipado.

De este modo, no resulta viable jurídicamente atender la petición de las peticionarias, en su calidad de cuidadoras primarias de personas con discapacidad, para participar en la modalidad electrónica por internet a través del SIVEI en la jornada de Voto Anticipado en el PEF 2023-2024 y los PEL Concurrentes en curso.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que existen condiciones materiales que imposibilitan en este momento hacer modificaciones al SIVEI para atender las peticiones de las referidas personas ciudadanas.

En este contexto, las modificaciones que se tendrían que efectuar al SIVEI para un eventual ejercicio del Voto Anticipado de personas cuidadoras primarias de personas con discapacidad, representan un riesgo en su implementación para la votación extraterritorial a través de este sistema.

Tal como se advierte, las actividades en la implementación del SIVEI se encuentran en una etapa de pruebas considerando la oferta electoral definida para el ámbito federal y para el ámbito local en las entidades que posibilitan el VMRE; asimismo, se cuenta con escasos días de dar paso a los simulacros, y el realizar modificaciones conlleva a regresar a la etapa de ajustes y pruebas, así como retomar fases de trabajo y tramos de control de la auditoría al sistema que ya han sido resueltos y que afectaría potencialmente el flujo de las actividades programadas para la implementación del VMRE bajo la modalidad electrónica a través de internet, por medio del SIVEI, para el PEF 2023-2024 y los PEL Concurrentes.



Lo anterior toda vez que, en lo relativo a las tecnologías e infraestructura de los servidores que permiten alojar el sistema, se requiere de diferentes herramientas de desarrollo, como son: el lenguaje de programación para la modificación a las bases de datos, las reglas para generar la vista de la implementación del aplicativo y la comunicación del sistema, así como los mecanismos de seguridad asociados con la operación dentro del territorio nacional, a fin de implementar canales seguros que actualmente sólo están considerados para la ciudadanía mexicana residente en el extranjero; además, deberán efectuarse pruebas y pasar por revisiones de seguridad que garanticen el ejercicio pleno de ese derecho.

Adicionalmente, se debe considerar el alcance de la auditoría en curso y los simulacros próximos a realizarse, previo a la puesta en operación del SIVEI.

Sin dejar de lado que, también se necesitan definir las reglas de negocio que debe cumplir el sistema para la realizar de manera correcta la generación de claves de acceso, efectuar pruebas de aceptación y de seguridad, así como la contratación de servicios de mensajes cortos (SMS) para invitar a la ciudadanía a participar por esta modalidad y el envío de correos electrónicos para emitir el voto, entre otros.

Es de tal importancia el desarrollo e implementación del voto por la vía electrónica que el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la LGIPE, estableció lo siguiente:

**Décimo Tercero.** El voto de los mexicanos en el extranjero por vía electrónica, se realizará hasta en tanto el Instituto Nacional Electoral haga pública la comprobación del sistema a utilizar para la emisión del voto en dicha modalidad. Para tal efecto, deberá contar con el dictamen de al menos dos empresas de prestigio internacional. Dicho sistema deberá acreditar certeza absoluta y seguridad comprobada, a efecto de garantizar el efectivo ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Para ello, el sistema que establezca el Instituto deberá garantizar, entre otros aspectos:

- a) Que quien emite el voto, sea el ciudadano mexicano residente en el extranjero, que tiene derecho a hacerlo;
- b) Que el ciudadano mexicano residente en el extranjero no pueda emitir más de un voto, por la vía electrónica u otra de las previstas en esta Ley;
- c) Que el sufragio sea libre y secreto, y

d) La efectiva emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto emitido.

En caso de que el Instituto determine la adopción de un sistema para la emisión del voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, deberá realizar la comprobación a que se refiere el presente transitorio antes de que inicie el proceso electoral del año 2018. De no contar con dicha comprobación para el proceso electoral referido, lo dispuesto en este transitorio será aplicable para los procesos electorales subsecuentes, hasta que se cuente con la comprobación respectiva.

Con base en lo anterior, se reitera que **no es jurídica ni materialmente viable, ni otorgará certeza absoluta y seguridad comprobada para garantizar el efectivo derecho del voto** de las personas que consideren una modalidad accesible para este sistema para los procesos electorales en curso, y por tanto tampoco es viable que este Instituto emita una respuesta favorable a las peticionarias en su calidad de cuidadoras para el ajuste de accesibilidad, modulación del voto de personas impedidas físicamente para acudir a la casilla a sufragar, su registro y voto por vía electrónica a través del SIVEI, conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden.

En efecto, la modalidad de Voto Anticipado por medios electrónicos a través del SIVEI no se encuentra regulada para el territorio nacional y, a su vez, existe una imposibilidad jurídica material y temporal para implementar un sistema de voto electrónico por internet en territorio nacional que garantice con total certidumbre y seguridad el efectivo ejercicio de su derecho a votar; lo anterior, sin menoscabo de que las peticionarias no están en el supuesto especial contemplado por el artículo 141 de la LGIPE de encontrarse incapacitadas físicamente para acudir presencialmente a la casilla, acreditando tener una incapacidad que les impida presentarse físicamente a la casilla que les corresponde para ejercer su derecho al voto el día de la jornada electoral, que es la base para permitir la alternativa del sufragio bajo la modalidad de Voto Anticipado en el domicilio.

No obstante, respecto a la petición de permitir el Voto Anticipado a las y los hijos mayores de edad de las peticionarias, de quienes refieren y acreditan que tienen una discapacidad para presentarse físicamente a la casilla que les corresponde para ejercer su derecho al voto el día de la jornada electoral, **se encuentran garantizados los derechos político-electorales de los CC. CARLOS ANTONIO “N”, JOSÉ ALBERTO “N” y ERIC “N”**, atendiendo lo que señala el Considerando 41 del Acuerdo INE/CG436/2023, por lo que han

sido incorporados a la LNEVA, a fin de que, si es su deseo, emitan el sufragio desde su domicilio en la jornada de Voto Anticipado:

**41.** El objetivo de esta modalidad de votación es garantizar el derecho a votar de las personas que, por alguna discapacidad, se encuentran impedidas de acudir a la casilla el día de la jornada electoral. Por tal motivo, se considera indispensable que esta modalidad permita a la ciudadanía que esté en este supuesto, el ejercicio efectivo de su derecho a votar para todos los cargos de elección pública que se vayan a renovar en 2024; lo contrario implicaría una garantía parcial del derecho que se pretende proteger.

Lo anterior es así, porque si bien es cierto que las peticionarias manifestaron en sus escritos de denuncia que la modalidad de votación anticipada no satisface los ajustes de accesibilidad necesarios para permitir el ejercicio de sus derechos político-electorales, particularmente el relacionado con el derecho al sufragio, desde una perspectiva de discapacidad, también lo es que esta autoridad electoral está obligada a cumplir cabalmente con todos los mandatos que se han dado en materia de medidas de inclusión para garantizar que todas las personas ciudadanas puedan ejercer su derecho a votar en condiciones de igualdad, entre las que se encuentra la modalidad de Voto Anticipado.

Por otra parte, no pasa por desapercibido por esta autoridad electoral que, con base en lo resuelto en el Amparo en Revisión 686/2022 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hayan surgido las jurisprudencias 2a./J 78/2023 y 2a/J. 67/2023, de rubros siguientes:

***“ACCESIBILIDAD EN LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD. PARA QUE EXISTAN CONDICIONES DE INCLUSIÓN E IGUALDAD, NO BASTA CON EVITAR QUE SE NIEGUE EL ACCESO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SINO QUE LA AUTORIDAD DEBE LLEVAR A CABO ACCIONES CONCRETAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD QUE GARANTICEN EL USO DE TODO EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON EL RESTO DE LAS PERSONAS USUARIAS.”***

***“ACCESIBILIDAD. ES OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES ELIMINAR OBSTÁCULOS Y BARRERAS PARA ASEGURAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL ENTORNO EN IGUALDAD DE CONDICIONES.”***

En ese sentido, este Instituto ha sostenido una visión de igualdad que incluye la igualdad material y sustantiva para que las personas con discapacidad se encuentren en posibilidad de ejercer su derecho al voto, pues precisamente, a través del procedimiento para la atención por artículo 141 de la LGIPE, así como los LOVA, se han logrado identificar las barreras para el ejercicio del

derecho al voto de las personas con algún impedimento físico para acudir tanto al Módulo de Atención Ciudadana a realizar un trámite registral para obtener su Credencial para Votar, como para acudir a la casilla el día de la jornada electoral a emitir su sufragio.

En el ámbito de competencia de este Instituto y a través de dichos mecanismos normativos, se han venido adaptando y modificando cada uno de los procedimientos establecidos para el ejercicio del derecho al voto, principalmente para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al mismo, sin necesidad de trasladarse físicamente a las instalaciones de este Instituto o bien, de acudir a la casilla que le corresponda a su domicilio, sino que es el personal de las Juntas Distritales Ejecutivas quienes acuden hasta su domicilio para la realización de los trámites de actualización al Padrón Electoral, así como para la emisión de su sufragio en la modalidad postal en la jornada de Voto Anticipado.

Así, las medidas adoptadas por este Consejo General en la materia, han sido implementadas a efecto de atender, de manera general, a las personas con discapacidad, garantizando sus derechos político-electorales, siendo que las mismas, de ninguna manera, imponen una carga desproporcionada o indebida para su ejercicio, pues por el contrario, como ha quedado señalado, tanto el procedimiento para la atención por artículo 141 de la LGIPE, como los LOVA y los Lineamientos aseguran el acceso de las personas con discapacidad al ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.

No obstante, como se manifestó previamente, actualmente el INE se encuentra material y jurídicamente imposibilitado para implementar *ex profeso* una modalidad distinta a la señalada en la reglamentación en comento, tal como es el SIVEI.

Asimismo, es importante señalar que, el diseño y puesta en operación del sistema que permitiera, en su momento, el ejercicio del voto electrónico por internet a las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero resultó un proceso complejo.

Desde la emisión de la LGIPE en mayo de 2014, el legislador previó un escenario en el que la materialización del derecho al voto por esta modalidad requería de estudios, recursos y tiempo, tan es así que determinó que, si el sistema no estuviese listo antes del inicio del PEF 2017-2018, se llevaría a cabo para los procesos electorales subsecuentes.

Fue en razón de la complejidad de implementar esa modalidad de votación que, con fecha 26 de agosto de 2020, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG234/2020, por el que se aprobaron las modalidades de votación postal y electrónica por internet, respectivamente; los Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero; los Lineamientos para la organización y operación del voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero, ambos para los PEL 2020-2021; así como, la presentación de los Dictámenes de Auditoría al SIVEI.

Dicho acuerdo fue diseñado dentro de los límites establecidos por la propia LGIPE; no hacerlo así iría en contra de la ley en comento, ya que estaría haciendo algo distinto a lo que le mandata la norma, pues no estaría desarrollando, complementando o pormenorizando las disposiciones legales, sino más bien invadiendo una esfera de acción reservada al Poder Legislativo. Sirve de sustento la jurisprudencia constitucional de la **SCJN, P./J. 30/2007**, cuyo rubro es **FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES**:

La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los Reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse Reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competecerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición.

En mérito de lo anterior, la viabilidad de atender lo solicitado por las peticionarias, no radica en un aspecto meramente interpretativo de la norma ni en la potencialización del derecho a votar como se pretende, pues la propia interpretación de la norma tiene límites; esto es, que la interpretación *pro persona*, en la lógica del principio de interpretación más favorable a la persona, no implica que se tenga que atender conforme a las pretensiones de las peticionarias, ni que se tenga que dejar de observar los principios y restricciones que prevé la norma fundamental, lo que en el caso concreto, sería la legalidad y certeza en el ejercicio de la función electoral.

Al respecto, sirven de sustento las tesis de jurisprudencia de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las claves 1a. /J. 104/2013 y 2a. /J. 56/2014, de rubros PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ESTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES, y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.

Por tanto, al no existir disposición legal que regule el voto electrónico a través de internet para las personas ciudadanas mexicanas residentes en el territorio nacional, no es jurídica ni materialmente viable que el INE pueda atender de manera favorable las peticiones de las solicitantes.

Por las consideraciones expuestas, resulta oportuno que este Consejo General emita la respuesta a las peticiones ciudadanas relacionadas con el ejercicio al voto a través del SIVEI, en acatamiento a las sentencias SUP-JDC-113/2024 y SUP-JDC-201/2024 acumulados; SUP-JDC-204/2024, SUP-JDC-207/2024 y SUP-JDC-213/2024 acumulados; SUP-JDC-214/2024; SUP-JDC-206/2024 y SUP-JDC-112/2024, dictadas por la Sala Superior del TEPJF, y de conformidad con el presente Considerando.

Sin perjuicio de lo anterior, por tratarse de un asunto sobre una nueva modalidad de votación en territorio nacional, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a efecto de que encabece los estudios, en conjunto con las demás Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas competentes de este Instituto; para que, en el ámbito de su respectiva competencia, y una vez que concluyan el PEF 2023-2024 y los PEL

Concurrentes, se analice la viabilidad para que las y los ciudadanos mexicanos residentes en territorio nacional emitan su voto en los próximos procesos electorales por internet de forma similar a la que las personas mexicanas residentes en el extranjero ejercen su derecho al sufragio.

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este Consejo General en ejercicio de sus facultades emite los siguientes:

## **A C U E R D O S**

**PRIMERO.** Se emite la respuesta a las peticiones ciudadanas relacionadas con el ejercicio al voto a través del Sistema del Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a las sentencias SUP-JDC-113/2024 y SUP-JDC-201/2024 acumulados; SUP-JDC-204/2024, SUP-JDC-207/2024 y SUP-JDC-213/2024 acumulados; SUP-JDC-214/2024; SUP-JDC-206/2024 y SUP-JDC-112/2024, dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**SEGUNDO.** Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a efecto de que encabece los estudios, en conjunto con las demás Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas competentes de este Instituto; para que, en el ámbito de su respectiva competencia, y una vez que concluyan el Proceso Electoral Federal 2023-2024 y los Procesos Electorales Locales Concurrentes, se analice la viabilidad para que las y los ciudadanos mexicanos residentes en territorio nacional emitan su voto en los próximos procesos electorales por internet de forma similar a la que las personas mexicanas residentes en el extranjero ejercen su derecho al sufragio.

**TERCERO.** Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a realizar las gestiones necesarias para que notifique el presente Acuerdo a las personas ciudadanas peticionarias.

**CUARTO.** Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a realizar las gestiones necesarias para que informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente instrumento sobre el cumplimiento dado a las sentencias emitidas dentro de los expedientes SUP-JDC-113/2024 y SUP-JDC-201/2024 acumulados; SUP-JDC-204/2024, SUP-JDC-207/2024 y SUP-JDC-213/2024 acumulados; SUP-JDC-214/2024; SUP-JDC-206/2024 y SUP-JDC-112/2024.

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de marzo de 2024, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Maestra Rita Bell López Vences, Maestro Jorge Montaña Ventura, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.

Se aprobó en lo particular lo relativo a las consideraciones jurídicas que sustentan un marco normativo para el voto por Internet dentro del país, en los términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por seis votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Maestra Rita Bell López Vences, Maestro Jorge Montaña Ventura, Maestro Jaime Rivera Velázquez y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala y, cinco votos en contra de las y los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez.

**LA CONSEJERA PRESIDENTA  
DEL CONSEJO GENERAL**

**LA ENCARGADA DEL DESPACHO  
DE LA SECRETARÍA  
DEL CONSEJO GENERAL**

**LIC. GUADALUPE TADDEI  
ZAVALA**

**MTRA. CLAUDIA EDITH SUÁREZ  
OJEDA**